----- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día veintidós de junio de dos mil veintiuno, reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Jorge Alejandro Durham Infante, Hernán de la Garza Tamez, Gloria Elena Garza Jiménez, Jesús Miguel Gracia Riestra y Omeheira López Reyna, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora indicadas.-----

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia, con la ausencia del Magistrado José Luis Gutiérrez Aguirre, y habiendo quórum el Magistrado Presidente declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el quince de junio de dos mil veintiuno, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.-----

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los siguientes asuntos:-----

1.- Oficio 534/2021-4 del nueve de junio de dos mil veintiuno, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que en una parte sobresee y en otra niega el amparo y protección solicitados, en el Juicio de Amparo 276/2020-IX promovido por Paulina Jimena Guerra Vázquez Mellado contra actos de esta y otras autoridades, dentro del expediente 5/2020 formado con motivo de la recusación interpuesta por la quejosa contra la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito

Judicial.-----

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, de la sentencia de trato se advierte que la autoridad federal concluyó en sobreseer respecto a las inconstitucionalidad de los artículos 219 y 222 del Código de Procedimientos Civiles, al coincidir en que se actualiza la causal de improcedencia invocada, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, puesto que la resolución reclamada en que se aplicó dicha norma deriva de otro acto consentido tácitamente por la impetrante, ya su primer acto de aplicación consiste en el auto de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, por el que la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, admitió a trámite la recusación planteada y ordenó emplazar a la parte recusante para que dentro del término de cinco días, más lo que procedan por razón de la distancia, ocurriera aseguir con el trámite de la recusación ante el Tribunal de Alzada, y si la protección constitucional se instó hasta el cuatro de marzo de dos mil veinte, al impugnar la resolución que declaró desierta la recusación, es evidente transcurrió con exceso el término ordinario de quince días con que contaba para la interposición de la demanda de amparo. En tanto con relación al segundo de dichos preceptos, advierte actualizada la diversa causal de improcedencia fundada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que de la demanda de amparo no se advierte formulados conceptos de violación. Por otro lado, se niega el amparo y protección al declararse infundados los conceptos de violación ya que la resolución recamada, contrario a lo argumentado por la impetrante, al declararse desierta la recusación, no se hace con base a la imposición de requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, pues

el requisito de que el recusante comparezca por escrito ante el superior a seguir con el trámite de la recusación, es una medida adecuada y lógica a efecto de evidenciar la intención del recusante de continuar el trámite de ésta y que en modo alguno limita, impide o obstaculiza el acceso a la justicia, aunado a que ese trámite es fácil de cumplir, porque no se evidencia razón alguna para no acatarlo, de donde se sigue que no basta que al interponerla se expresen los motivos en los que se fundó, pero para continuar su trámite era necesario que la recusante compareciera dentro del término de cinco días ante el superior inmediato a seguir el curso de la misma, por lo que es necesario presentar otro escrito en el término fijado, a fin de evidenciar su intención de proseguir la recusación presentada, continuación que si bien los artículos 219 y 222 no exigen que deba comparecer por escrito, de los diversos 22 y 22 bis del Código de Procedimientos Civiles, se obtiene que pudo hacerlo por escrito o vía electrónica, por ser la forma en que las partes deben presentar sus promociones en el procedimiento; declarándose también infundado el diverso concepto en que se arguye la inconstitucionalidad de la multa impuesta, dado que esta se apoya en la razón de que la recusante no compareció a continuar el trámite de la recusación, evidenciando con ello su falta de interés en demostrar sus afirmaciones, y porque de las consideraciones al efecto expresadas, ponen de manifiesto que reúne con los requisitos de fundamentación y motivación.-----

2.- Oficio 25635/2021 del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia que en una parte sobresee y en otra niega el amparo y protección solicitados, en el Juicio de Amparo 687/2020 promovido por Irazema Juárez el Ángel contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 10/2020 formado con motivo de la recusación

interpuesta por la quejosa contra el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.-----

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso a), fracción II, de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Por otra parte, se dispuso acusar recibo a la autoridad federal con la expresa mención de que el oficio que se provee, junto con la copia del escrito de interposición y expresión de agravios, se recibió en la Oficialía de Partes mediante pieza postal de correo registrado con folio 25445, el quince de junio de dos mil veintiuno, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.-----

3.- Oficio 17426/2021 del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el número 968/2021 la demanda de amparo que promueve Inocensio Cázares Rodríguez contra actos de esta y otras autoridades; asimismo requiere para que en el término de quince días se rinda el informe justificado.-----

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe justificado que se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las constancias que le den sustento; y al respecto, de antecedentes se advierte que la quejosa reclama la resolución del veinte de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Colegiada Penal dentro del toca penal 272/2018 relativo a la causa penal 39/2017 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, que se instruye contra el quejoso por el delito de homicidio calificado, en el cual se ordena la reposición del procedimiento; habiendo señalado las nueve horas con cincuenta minutos

del doce de julio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.-----

4.- Oficio 17446/2021 del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que concede la suspensión provisional en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo 968/2921 promovido por Inocensio Cázares Rodríguez contra actos de esta y otras autoridades; asimismo requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas se rinda el informe previo.-----

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe previo que se solicita y al respecto, del auto transcrito se advirtió se concedió la medida suspensiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, si no se ha llevado a cabo la reposición reclamada, ordenada dentro de la causa penal 39/2017, que se instruyó al quejoso, no se lleve a cabo la materialización de la misma, hasta e tanto se notifique a la autoridad responsable la suspensión definitiva; habiendo señalado las nueve horas con veinticinco minutos del veintitrés de junio en curso, para que tenga verificativo la audiencia incidental.-----

5.- Oficio 726/2021 del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 343/2020 promovido por Alejandro Eduardo Reyes Loperena contra actos de esa autoridad; asimismo remite copia certificada de las constancias conducentes.-----

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dentro del toca de apelación 174/2020 dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional al impetrante, lo cual hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 725/2021 de esa propia fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.-----

6.- Escrito del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, del licenciado Felipe de Jesús Pérez González, apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se remita al inferior copia certificada de la resolución pronunciada, dentro del expediente 6/2021 formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 195/2020 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil Oral promovido por “HSBC México”, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en contra de César Osvaldo Ortega Reyes, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.-----

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1077, y 1117, párrafos sexto y octavo, del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde y al respecto, tomando en cuenta que efectivamente las partes constan debidamente notificadas de la interlocutoria dictada el dieciocho de mayo último, mediante la cual se declaró improcedente la incompetencia por declinatoria planteada, sin que, a pesar del término transcurrido, se advierta haya sido impugnada, en consecuencia, remítase al Juzgado de Primera Instancia copia certificada de la misma a efecto de

que esté en condiciones de continuar con la secuela del procedimiento.----

7.- Oficio sin número del diez de junio de dos mil veintiuno, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos que le fueron requeridos, dentro del expediente 19/2021 formado con motivo de la cuestión de competencia planteada por Adriana Berenice Márquez Márquez, para conocer de la demanda de Medios Preparatorios a Juicio relativos sobre exhibición de documentos.-----

ACUERDO.- El titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial determinó no admitir la demanda planteada bajo la consideración que los hechos expuestos derivan de una cuestión familiar y particularmente de que la actora alude promovió un juicio de diverso ante el Juez Tercero Familiar de esta ciudad, solicitando la separación del domicilio conyugal del cónyuge varón, situación por la que debe ser del conocimiento del juez de la causa quien ordenó del evento; en tanto el Juez en Familiar consideró no ser competente en razón de la materia, pues corresponde a los jueces de lo civil conocer de los negocios contenciosos que verán sobre propiedad además de hechos reales sobre inmuebles, además que para los actos preparatorios del juicio será competente el juez que lo fuere para el negocio principal, y la acción que se trata de seguir es tendente a la recuperación de la posesión de todos los bienes de los cuales se apoderaron sin su consentimiento, así como del inmueble donde se estableció el domicilio conyugal, y la providencia decretada en el divorcio de que conoce, se concreta a que el demandado desaloje el domicilio conyugal, sin que exista orden de desajo a la promovente. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción IV, 197 y 200 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite la cuestión de competencia planteada. En consecuencia, mediante notificación personal se ordenó

citar a la promovente, y al Agente del Ministerio Público de la adscripción, para que comparezcan ante este Tribunal a una audiencia para que en ella ofrezcan pruebas y en su caso formulen sus alegatos, que se fijó para las doce horas del seis de julio de dos veintiuno, misma audiencia que tendrá verificativo concurran o no las partes, y en la cual se procederá al dictado de la sentencia; fecha que se fija con el objeto de estar en condiciones de practicar con oportunidad las notificaciones necesarias. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 y 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a la promovente señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, el domicilio mencionado, autorizando para dicho efecto al abogado que menciona, e igualmente se autorizó la consulta del expediente, acuerdos y promociones digitalizados, por medios electrónicos, así como para presentar promociones por la misma vía, y para que se le hagan las notificaciones personales, a través de la cuenta de correo electrónico que la promovente proporciona, y que corresponde al mencionado asesor jurídico.-----

8.- Escrito del catorce de junio de dos mil veintiuno, dos anexos y una copia simple, de Felipe Javier Haces Valdez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de “Educación y Desarrollo Social Tamaulipas”, A.C., mediante el cual promueve Juicio Sumario Civil sobre Incumplimiento de Contrato de Prestación de Servicios en contra de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas.-----

ACUERDO.- No se está en el caso de admitir a trámite la demanda, toda vez que no se actualiza la competencia del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en razón de la materia; ello pues, al tenor del artículo 114, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y su correlativo 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, su competencia está acotada en el ámbito

jurisdiccional, para conocer de las citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las mismas figura como parte, sea actora o demandada, el Estado de Tamaulipas; de donde debe colegirse que no resulta competente para conocer de asuntos de naturaleza distinta. El estudio de la demanda permite advertir que las prestaciones reclamadas se sustentan en el contrato celebrado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, sobre prestación de servicios de evaluación de proceso del fondo de aportaciones múltiples (FAM) asistencia social del ejercicio 2019, del que la parte actora sostiene su representada dio cumplimiento a las obligaciones contraídas, mientras que la demandada no ha realizado el pago a que se obligó, demandado a través del presente juicio se le imponga el pago de todas y cada una de las obligaciones contraídas; esto es, la acción ejercida este se funda en el incumplimiento que se atribuye a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, en la obligación de pago contraída en razón del señalado contrato sobre prestación de servicios, el cual se advierte celebrado al amparo de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, cuya aplicación excluye la competencia del Tribunal Pleno para conocer de dicha controversia, por ser evidentemente de naturaleza administrativa, y su incumplimiento tiene el mismo carácter; contrato que como en antecedentes queda señalado, deriva de la adjudicación directa según el dictamen emitido por el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, en la novena sesión ordinaria celebrada en la misma fecha. En ese sentido, la acción que mediante el juicio sumario civil pretende ejercer no puede desvincularse del análisis del contrato respectivo ni del incumplimiento que al mismo se atribuye a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, al seguir dicha acción su misma naturaleza. Por lo que no es una controversia de carácter propiamente civil sino una de naturaleza administrativa, en la que debe resolverse lo inherente al

cumplimiento al que el promovente pretende se constriña a la parte demandada, mediante el pago en favor de su representada de todas y cada una de las obligaciones contraídas y que reclama en su demanda. Lo anterior, tomando en cuenta el sentido de la tesis de jurisprudencia 2a./J.14/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 292/2017, entre las sustentadas por el Pleno del Primer Circuito y el Pleno del Segundo Circuito, ambos en Materia Civil; pues la administración pública no puede contratar adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios con los particulares sino en la forma y a través de los procedimientos que la misma ley autoriza, so pena de nulidad de los actos que se realicen en contravención a la misma; y en el caso queda de manifiesto que dicho contrato de prestación de servicios fue celebrado mediante el procedimiento de adjudicación directa, por excepción al diverso de licitación pública, en términos de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, por lo cual la acción deducida debe catalogarse de naturaleza administrativa. Sustenta lo anterior la invocada tesis de jurisprudencia de rubro: **“CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.”**, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, Materia Administrativa, página 1284. Sin que sea obstáculo el contenido de la cláusula Décima Segunda del propio contrato, donde se establece por la partes la prevención acerca de las disposiciones legales aplicables, así como su sometimiento para la interpretación y cumplimiento del contrato, como de todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, a la aplicación de la ley mexicana y a la jurisdicción de los tribunales competentes de esta capital, renunciando “El Proveedor” a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera

corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa; en virtud de que la designación acerca de la legislación aplicable no entraña sometimiento alguno de competencia, además que se está frente a una incompetencia que deviene en razón de la materia, la cual por su naturaleza es improrrogable, por lo cual no se encuentra a disposición de las partes prescindir de los tribunales que legalmente resultan competentes, incluso, dicha estipulación no puede surtir efectos sino en consonancia con lo establecido por el artículo 115 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, en relación con la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que le confiere competencia a este para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que, entre otros, se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal centralizada y paraestatal. Como tampoco se opone a esta determinación, lo estimado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primera Distrito Judicial con residencia en esta capital, cuando con relación a la demanda que se plantea, considera no ser competente; toda vez que como se advierte de la copia simple del acuerdo emitido en treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, exhibida por el promovente, el análisis de su competencia lo hace en función del carácter que la dependencia demandada tiene, como parte integrante de la administración pública estatal centralizada, que por encontrarse imbuida en la esfera del Poder Ejecutivo del Estado la competencia corresponde a este Tribunal Pleno, sin embargo, como está visto, su competencia jurisdiccional se reduce a las controversias del orden civil o mercantil que se susciten entre particulares y el Estado, y lo que aquí se establece es que la acción

ejercida es de la naturaleza administrativa. Consecuentemente, lo procedente en el presente es que, sin declinar competencia a ningún otro tribunal, se dejan a disposición de la parte actora los documentos y copias simples exhibidos, previa toma de razón y de recibo que se deje asentada en autos; ello con el objeto de que si lo considera pertinente, proceda conforme a sus intereses convenga. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/97 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: **“COMPETENCIA. SI EL JUICIO NO SE HA INICIADO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO QUE CARECE DE ELLA, PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL ACTOR LA DEMANDA Y SUS ANEXOS, SIN DECLINARLA A FAVOR DE OTRO.”**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, Materia Civil, Común, Tesis 1a./J. 25/97, página 53, Registro 198216. Por otra parte, se proveyó respecto al domicilio señalado para para oír y recibir notificaciones, así como la autorización que en ese sentido confiere a los profesionistas que menciona y designación de asesor jurídico.-----

9.- Escrito del catorce de junio de dos mil veintiuno, dos anexos y una copia simple, de Felipe Javier Haces Valdez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de “Educación y Desarrollo Social Tamaulipas”, A.C., mediante el cual promueve Juicio Sumario Civil sobre Incumplimiento de Contrato de Prestación de Servicios en contra de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas.-----

ACUERDO.- No se está en el caso de admitir a trámite la demanda, toda vez que no se actualiza la competencia del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en razón de la materia; ello pues, al tenor del artículo 114, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado de

Tamaulipas, y su correlativo 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, su competencia está acotada en el ámbito jurisdiccional, para conocer de las citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las mismas figura como parte, sea actora o demandada, el Estado de Tamaulipas; de donde debe colegirse que no resulta competente para conocer de asuntos de naturaleza distinta. El estudio de la demanda permite advertir que las prestaciones reclamadas se sustentan en el contrato celebrado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, sobre prestación de servicios de evaluación de proceso del fondo de aportaciones múltiples (FAM) asistencia social del ejercicio 2019, del que la parte actora sostiene su representada dio cumplimiento a las obligaciones contraídas, mientras que la demandada no ha realizado el pago a que se obligó, demandado a través del presente juicio se le imponga el pago de todas y cada una de las obligaciones contraídas; esto es, la acción ejercida este se funda en el incumplimiento que se atribuye a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, en la obligación de pago contraída en razón del señalado contrato sobre prestación de servicios, el cual se advierte celebrado al amparo de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, cuya aplicación excluye la competencia del Tribunal Pleno para conocer de dicha controversia, por ser evidentemente de naturaleza administrativa, y su incumplimiento tiene el mismo carácter; contrato que como en antecedentes queda señalado, deriva de la adjudicación directa según el dictamen emitido por el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, en la novena sesión ordinaria celebrada en la misma fecha. En ese sentido, la acción que mediante el juicio sumario civil pretende ejercer no puede desvincularse del análisis del contrato respectivo ni del incumplimiento que al mismo se atribuye a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, al seguir dicha acción su misma naturaleza. Por

lo que no es una controversia de carácter propiamente civil sino una de naturaleza administrativa, en la que debe resolverse lo inherente al cumplimiento al que el promovente pretende se constriña a la parte demandada, mediante el pago en favor de su representada de todas y cada una de las obligaciones contraídas y que reclama en su demanda. Lo anterior, tomando en cuenta el sentido de la tesis de jurisprudencia 2a./J.14/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 292/2017, entre las sustentadas por el Pleno del Primer Circuito y el Pleno del Segundo Circuito, ambos en Materia Civil; pues la administración pública no puede contratar adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios con los particulares sino en la forma y a través de los procedimientos que la misma ley autoriza, so pena de nulidad de los actos que se realicen en contravención a la misma; y en el caso queda de manifiesto que dicho contrato de prestación de servicios fue celebrado mediante el procedimiento de adjudicación directa, por excepción al diverso de licitación pública, en términos de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, por lo cual la acción deducida debe catalogarse de naturaleza administrativa. Sustenta lo anterior la invocada tesis de jurisprudencia de rubro: **“CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.”**, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, Materia Administrativa, página 1284. Sin que sea obstáculo el contenido de la cláusula Décima Segunda del propio contrato, donde se establece por la partes la prevención acerca de las disposiciones legales aplicables, así como su sometimiento para la interpretación y cumplimiento del contrato, como de todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, a la aplicación de la ley mexicana y a la jurisdicción de los

tribunales competentes de esta capital, renunciando “El Proveedor” a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa; en virtud de que la designación acerca de la legislación aplicable no entraña sometimiento alguno de competencia, además que se está frente a una incompetencia que deviene en razón de la materia, la cual por su naturaleza es improrrogable, por lo cual no se encuentra a disposición de las partes prescindir de los tribunales que legalmente resultan competentes, incluso, dicha estipulación no puede surtir efectos sino en consonancia con lo establecido por el artículo 115 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, en relación con la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que le confiere competencia a este para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que, entre otros, se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal centralizada y paraestatal. Como tampoco se opone a esta determinación, lo estimado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primera Distrito Judicial con residencia en esta capital, cuando con relación a la demanda que se plantea, considera no ser competente; toda vez que como se advierte de la copia simple del acuerdo emitido en treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, exhibida por el promovente, el análisis de su competencia lo hace en función del carácter que la dependencia demandada tiene, como parte integrante de la administración pública estatal centralizada, que por encontrarse imbuida en la esfera del Poder Ejecutivo del Estado la competencia corresponde a este Tribunal Pleno, sin embargo, como está visto, su competencia jurisdiccional se reduce a

las controversias del orden civil o mercantil que se susciten entre particulares y el Estado, y lo que aquí se establece es que la acción ejercida es de la naturaleza administrativa. Consecuentemente, lo procedente en el presente es que, sin declinar competencia a ningún otro tribunal, se dejan a disposición de la parte actora los documentos y copias simples exhibidos, previa toma de razón y de recibo que se deje asentada en autos; ello con el objeto de que si lo considera pertinente, proceda conforme a sus intereses convenga. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/97 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: **“COMPETENCIA. SI EL JUICIO NO SE HA INICIADO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO QUE CARECE DE ELLA, PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL ACTOR LA DEMANDA Y SUS ANEXOS, SIN DECLINARLA A FAVOR DE OTRO.”**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, Materia Civil, Común, Tesis 1a./J. 25/97, página 53, Registro 198216. Por otra parte, se proveyó respecto al domicilio señalado para para oír y recibir notificaciones, así como la autorización que en ese sentido confiere a los profesionistas que menciona y designación de asesor jurídico.-----

TURNO DE ASUNTOS

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR

1. Expediente 1113/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.-----
2. Expediente 619/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.-----

3. Expediente 947/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.-----
4. Expediente 221/2020 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.-----
5. Expediente 419/2020 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.-----
6. Expediente 713/2020 procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.-----
7. Expediente 662/2018 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.-----
8. Expediente 510/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial. Turnado a la Séptima Sala.-----
9. Expediente 966/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.-----
10. Expediente 966/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.-----
11. Expediente 763/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.-----
12. Expediente 1014/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Novena

Sala.-----

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR

1. Expediente 90/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
2. Expediente 886/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
3. Expediente 119/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
4. Expediente 177/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
5. Expediente 221/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
6. Expediente 256/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
7. Expediente 550/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
8. Expediente 753/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
9. Expediente 1009/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera

- Sala Colegiada.-----
10. Expediente 207/2020 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
 11. Expediente 231/2020 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
 12. Expediente 404/2020 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
 13. Expediente 1186/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----
 14. Expediente 1054/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----
 15. Expediente 274/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----
 16. Expediente 517/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----
 17. Expediente 966/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----
 18. Expediente 50/2020 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----
 19. Expediente 75/2020 procedente del Juzgado Segundo de Primera

Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----

20. Expediente 231/2020 procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----

21. Expediente 315/2020 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----

22. Expediente 348/2020 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----

23. Expediente 442/2020 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----

24. Expediente 522/2020 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----

UNITARIAS PENALES

1. Expediente 34/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-----

2. Expediente 4/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Soto la Marina.- Turnado a la Segunda Sala.-----

3. Expediente 56/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.-----

4. Expediente 668/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.-----

5. Expediente 131/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-----

6. Expediente 117/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-----

COLEGIADA PENAL

1. Expediente 85/2003 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----

2. Expediente 79/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----

3. Expediente 288/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----

4. Expediente 115/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----

5. Expediente 787/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----

6. Expediente 19/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----

7. Expediente 42/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----

8. Expediente 101/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada

Penal.-----

9. Expediente 117/2020 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----

----- Con lo anterior, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión siendo las diez horas con cuarenta minutos del día de su fecha.-----

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Jorge Alejandro Durham Infante, Hernán de la Garza Tamez, Gloria Elena Garza Jiménez, Jesús Miguel Gracia Riestra y Omeheira López Reyna, con la ausencia del Magistrado José Luis Gutiérrez Aguirre; en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.-----

Magistrado Horacio Ortiz Renán
Presidente

Mdgo. Alejandro Alberto Salinas Martínez

Mgdo. Hernán de la Garza Tamez

Mgdo. Jorge Alejandro Durham Infante

Mgda. Omeheira López Reyna

Mgdo. Adrián Alberto Sánchez Salazar

Mgdo. Jesús Miguel Gracia Riestra

Mgda. Gloria Elena Garza Jiménez

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos
Secretario General de Acuerdos

Las firmas que anteceden corresponden a la última página del acta de Sesión Plenaria de fecha (22) veintidós de junio de (2021) dos mil veintiuno. Doy fe.-----